



Institute for the Elimination of Poverty & Genocide



HB 1105: El Proyecto de Ley de Perfil Racial de Georgia

Este Proyecto de ley obliga a la policía local a solicitar su participación con los contratos 287(g) que asignan a la policía local la tarea de cumplir la ley federal de inmigración. Esta desastrosa política ha dado lugar a la elaboración de perfiles raciales, aterrizando a las comunidades inmigrantes y malgastando recursos locales. Este proyecto de ley también exige que las cárceles retengan a personas para ICE basándose en solicitudes de detención que son propensas a errores y a menudo se consideran inconstitucionales, creando responsabilidad para todos los involucrados en su aplicación. Este proyecto de ley también modifica la definición de “políticas santuario” para prohibir políticas que promuevan el incumplimiento de las solicitudes de detención de ICE y requiere pruebas de ADN para cualquier persona condenada por cualquier delito, incluidos delitos menores, que esté sujeta a una detención de ICE.

1) Pone en peligro a nuestras comunidades al obligar a las autoridades al participar en contratos 287(g) con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta colaboración con el DHS aumentará la discriminación racial y los ataques a las comunidades de color.

- HB 1105 obliga a las autoridades a solicitar su participación en contratos con las autoridades federales de inmigración a través de programas como el 287(g), que es una política desastrosa que delega a las autoridades locales la tarea de hacer cumplir la ley federal de inmigración.
- Mandato sin financiación que desperdicia recursos
 - Según un informe del Instituto de Políticas y Presupuesto de Georgia (GBPI) de 2018, el programa 287(g) supone una tremenda carga financiera para las localidades de Georgia. El informe afirma que el programa 287(g) del condado de Gwinnett “cuesta a los contribuyentes locales **al menos \$9,8 millones más en ocho años desde su inicio en 2009 hasta 2016, un promedio de 1,2 millones de dólares al año**”. Casi todos los gastos del programa 287(g) se toman directamente de los presupuestos locales y del dinero de los impuestos. De hecho, GBPI estima que las localidades de Georgia con un programa 287(g) recuperaron sólo el 12% del costo que llevó implementar el programa 287(g). programa.
- Aumenta el perfil racial
 - Estas políticas aumentarán la discriminación racial como lo han hecho en los condados que ya colaboran con ICE. Cuando el condado de Gwinnett tenía el programa 287(g), muchos miembros de la comunidad latina informaron estar detenidos por la policía sin causa probable o sospecha razonable.



Institute for the Elimination of Poverty & Genocide

- Los informes muestran que las políticas 287(g) incentivan la elaboración de perfiles raciales por parte de las fuerzas del orden “utilizando controles de tránsito, patrullas e investigaciones criminales para identificar inmigrantes para su deportación”. Estos arrestos arbitrarios por tráfico y otras infracciones menores” se llevan a cabo para someter a los detenidos a controles de inmigración como parte del proceso de registro en la cárcel.
- Según un estudio nacional de 2011, era común en los condados de Cobb y Gwinnett que “los agentes de policía detuvieran a inmigrantes por una amplia variedad de infracciones menores y luego los llevaran a las cárceles del condado bajo cargos de identificación inadecuada. De hecho, casi 500 de los no ciudadanos con órdenes de retención de ICE impuestas por el programa 287(g) del condado de Gwinnett en los primeros 14 meses de operación habían sido acusados únicamente de conducir sin licencia”.
- Una investigación del Departamento de Justicia de 2012 encontró que, en un condado del estado de Carolina del Norte, que participó en el programa 287(g), las fuerzas del orden locales se dirigieron a la comunidad latina. Los agentes tenían entre cuatro y diez veces más probabilidades de detener a los conductores latinos que a los conductores no latinos.
- El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial ha pedido repetidamente que se ponga fin a “políticas que promueven indirectamente la elaboración de perfiles raciales, como el programa de la sección 287 (g).
- Aterroriza a los miembros de la comunidad
 - Un estudio reciente que examina cómo la aplicación de las políticas de inmigración afecta la salud mental de los jóvenes latinos en el condado de Gwinnett encontró que “los jóvenes vincularon las políticas de aplicación de las leyes de inmigración como la 287(g) con sistemas excluyentes que contribuyeron **al miedo, la marginación y la pérdida en sus comunidades, generando experiencias de tristeza, pena, aislamiento, desesperanza y baja autoestima**”.
 - El mismo informe describió el miedo constante que sentían los jóvenes debido a la fuerza judicial local.
 - “Los jóvenes describieron cómo la policía vigilaba sus vecindarios y escuelas y cómo la policía local y el ICE atacaban a los inmigrantes latinos en sus lugares de trabajo, tiendas de comestibles y las carreteras por las que conducían para ir a trabajar o realizar su vida cotidiana. Como resultado, los jóvenes y las familias latinas tuvieron que adaptar sus vidas para no ser atacados, lo que provocó miedo y



Institute for the Elimination of Poverty & Genocide

presión continuos. Los jóvenes afrontaron muchas pérdidas relacionadas con la deportación y el temor a la deportación”.

- Un joven describió “vivir con miedo a la policía y tener que esconderse y renunciar a cosas porque no quieres que deporten a la gente. Otro joven informó: “Nunca puedo sentirme seguro en lugares en los que se supone que debo sentirme seguro”.
- Otro estudio encontró una disminución significativa en el peso y el desarrollo fetal de los bebés nacidos de inmigrantes latinas luego de la adopción por parte de su condado de un acuerdo 287(g), probablemente debido al estrés intenso sobre las madres embarazadas.
- Otros investigadores observaron que los acuerdos 287(g) parecen aumentar la probabilidad de que los bebés nazcan alarmantemente prematuros en familias hispanas.
- Además, la adopción de los acuerdos 287(g) se ha relacionado con tasas reducidas de asistencia escolar entre los niños hispanos, incluidos los niños hispanos que probablemente provienen de hogares nacidos en Estados Unidos.
- Un miembro de la comunidad comentó que los compañeros migrantes, incluso los inmigrantes documentados, se niegan a interactuar con las autoridades incluso cuando están en peligro por temor a ser detenidos debido a la discriminación racial.

2) Crea un proceso de deportación inconstitucional y propenso a errores utilizando la autoridad judicial local. Esto pone en peligro a las comunidades de inmigrantes y crea riesgo.

- Este proyecto de ley exige que las agencias policiales cumplan y, en algunos casos, retengan a las personas durante 48 horas según los avisos de detención de inmigrantes, a menudo denominados “detenciones de ICE”, del DHS o ICE. Este proyecto de ley también prohíbe a los funcionarios locales adoptar políticas que restrinjan el cumplimiento de las órdenes de retención de ICE.
 - A) Algunos tribunales han sostenido que cumplir con una orden de detención de ICE es inconstitucional porque obligaría a las agencias locales de aplicación de la ley a mantener a un individuo bajo su custodia más allá del tiempo que de otro modo estaría detenido. Esto se hace sin una orden judicial o causa probable, como lo exige la Cuarta Enmienda.
 - B) Las órdenes de detención de ICE suelen ser propensas a errores.
 - Según NPR, entre 2007 y 2016, 693 ciudadanos estadounidenses estuvieron recluidos en cárceles locales con órdenes de detención de ICE y otros 818 ciudadanos estadounidenses estuvieron retenidos en centros de detención de inmigrantes. Esto indica que más de 1.500 personas fueron detenidas o encarceladas injustamente durante este tiempo. Según la Universidad de



Institute for the Elimination of Poverty & Genocide

Syracuse, entre 2008 y 2012, los propios datos de ICE indican que colocaron órdenes de retención de ICE a 834 ciudadanos estadounidenses y 28,489 residentes permanentes legales. Esto incluye a 11 ciudadanos estadounidenses, 10 de los cuales no tenían antecedentes penales, y 861 residentes permanentes legales con sede en Georgia.

- La ACLU del norte de California obtuvo registros de correos electrónicos de ICE en 2022 que muestran que los funcionarios del Departamento Correccional de California sabían que al menos algunas de las personas que detuvieron eran ciudadanos estadounidenses, pero aun así los remitieron a ICE.
- C) Las órdenes de detención de ICE se administran de manera amplia
 - Un informe del Instituto de Política Migratoria de 2011 mostró que alrededor del 67% de las detenciones de ICE de 2010 en el condado de Cobb fueron impuestas a personas por infracciones de tránsito o por ninguna infracción.
 - El mismo estudio mostró que el 60% de las detenciones de ICE en Gwinnett fueron impuestas a personas con infracciones de tránsito y delitos menores durante el mismo período. Además, el informe encontró que las localidades del sureste con el programa 287(g), incluidos los condados de Cobb y Gwinnett, tenían “proporciones relativamente altas de infractores de tránsito y proporciones bajas de infractores de nivel 1 y 2 en comparación con el promedio nacional”.
 - Durante los últimos años fiscales de las divulgaciones disponibles de ICE, más del 80% de los arrestos de ICE en los condados de Cobb, Hall, Whitfield y Gwinnett fueron arrestos de personas sin violaciones o con violaciones de bajo nivel.
- D) Las detenciones de ICE pueden crear responsabilidad. Varios ciudadanos estadounidenses han presentado demandas contra entidades como ICE, las oficinas del sheriff y los departamentos correccionales estatales. Estas entidades los sometieron a detenciones ilegales e inconstitucionales basadas en detenciones de inmigración defectuosas. Desde entonces, algunas de esas localidades han puesto fin a su política de detener a personas basándose únicamente en una orden de detención de ICE. Una ciudad de Michigan se vio obligada a pagar a un ciudadano estadounidense 190.000 dólares después de que el departamento de policía de la ciudad lo transfiriera a la custodia del ICE después de su liberación. Las localidades de Nueva Jersey se vieron obligadas a pagar 150.000 dólares en daños y perjuicios a un ciudadano estadounidense por detenerlo ilegalmente bajo una orden de retención de ICE. Un condado de California se vio obligado a pagar 35.000 dólares para



Institute for the Elimination of Poverty & Genocide

resolver una demanda presentada por un ciudadano estadounidense por facilitar su traslado a ICE.

- A pesar de los claros defectos de las órdenes de retención de ICE, este proyecto de ley exige que se recopilen muestras de ADN de personas condenadas por un delito grave o menor y sujetas a una orden de retención de ICE. Esta disposición es redundante e innecesaria ya que la ley federal ya exige la recolección de ADN de personas no estadounidenses que están detenidas bajo autoridad estadounidense, como por ejemplo ICE. La recolección de ADN también añade costos innecesarios mientras el proyecto de ley no contenga ninguna nota fiscal.
 - El proyecto de ley no especifica cómo ni en qué base de datos se almacenará la información del ADN ni qué agencias podrán acceder a la información. Esto es especialmente preocupante ya que el ADN contiene inherentemente datos personales sensibles, como información de salud, ascendencia y datos predictivos sobre la predisposición a ciertas enfermedades o comportamientos.
 - Esta disposición señala a los inmigrantes condenados por delitos menores: las personas condenadas por el mismo delito menor que no están sujetas a una orden de detención de ICE no tendrán que someterse a una muestra de ADN.
 - El proyecto de ley no contiene disposiciones para la posterior eliminación de la información de ADN. Esto significa que el ADN de las personas se almacenaría incluso si la orden de retención se equivocó o si la persona es posteriormente liberada de la detención de ICE.

3) Trabajar con ICE no hace que nuestras comunidades sean más seguras; por el contrario, deja a las comunidades vulnerables a los delitos sin poder buscar protección.

- Inmigrantes sobrevivientes a violencia doméstica, agresión sexual y trata de personas se verán disuadidos de acceder a los servicios, lo que los colocará en mayor riesgo y socavarán la seguridad pública.
- Múltiples informes han demostrado que no existe ninguna relación entre la inmigración y la delincuencia. En todo caso, los informes han demostrado que es menos probable que los inmigrantes incurran en conductas delictivas.
- Además, un estudio nacional realizado por la Universidad de California, Davis, encontró que las deportaciones no reducen el crimen. El estudio indicó que no existe correlación entre las deportaciones y la seguridad pública; en particular, las deportaciones no tuvieron efecto en los delitos violentos o contra la propiedad.
- Un estudio de 2017, realizado por el profesor Tom Wong de la Universidad de California en San Diego, encontró que los condados con políticas que protegen a los inmigrantes tenían tasas de criminalidad más bajas.



Institute for the Elimination of Poverty & Genocide

- Al finalizar sus acuerdos 287(g), los alguaciles de los condados de Cobb y Gwinnett informaron relaciones mejoradas con sus comunidades.
- 4) Promueve la retórica antiinmigrante mediante la creación de informes públicos sesgados.
- Este proyecto de ley exige que el Comisionado de Correcciones y todos los carceleros publiquen informes públicos sobre datos agregados que incluyan información como: estado migratorio, delitos, países de origen de ciudadanos no estadounidenses, número total de no ciudadanos bajo custodia, categoría separada para ciudadanos estadounidenses que son ciudadanos con doble ciudadanía de otro país, número total de personas registradas, número total de personas nacidas en el extranjero, número total de consultas realizadas a ICE u otra agencia federal sobre el estado migratorio de la persona bajo su custodia y número total de sus respuestas, y número total de detenciones de inmigración utilizadas por ICE.
 - Estas cifras estarán sesgadas para contar una narrativa falsa sobre los inmigrantes bajo custodia carcelaria porque incluirán a personas encarceladas que sólo han sido acusadas y no condenadas por un delito.